

Javier Guerrero Barón*

Mercados de violencia, mercados ilegales y guerras civiles en América Latina en los años noventa: Tesis para un estudio etnográfico de las economías de guerra

PRESENTACIÓN



No cabe duda de que América Latina albergó en los años noventa lo que estudios recientes denominan “mercados de violencia” en el contexto de economías de guerra, donde actores armados (guerrillas, pandillas, paramilitares o grupos de justicia privada y grupos mercenarios) han diseñado estrategias de apropiación ligadas a transacciones de poder para controlar flujos económicos y mercados de productos de alto valor o transacciones extorsivas sobre sectores y agentes productivos, para financiar una lucha o mantener un *statu quo* de violencia en beneficio de los mismos ejércitos en conflicto.

Estas actividades que rentan y se reinvierten hacen que el conflicto sea sostenible en el tiempo, desde el punto de vista económico; pero, en tiempos de crisis, los gobiernos han tratado de asimilar a esos actores de la guerra con las organizaciones del crimen organizado. Ambos fenómenos son cercanos pero se mueven con lógicas distintas.

Para los principales estudiosos de los conflictos armados, los ideales políticos y los grandes proyectos ideológicos han desaparecido, y del conjunto de estudios sobre lo que se denominan las “nuevas guerras” se podría deducir que la vieja máxima de Clausewitz “la guerra es la continuación de la política por otros medios” ha mutado en “la guerra es la regulación de la economía por otros medios”. Tal vez las guerras siempre han tenido trasfondos y componentes económicos

* Profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Candidato a Doctorado en Historia, Universidad Nacional de Colombia.

pero nunca habían estado tan a la vista como en las guerras actuales o nunca antes los discursos políticos y académicos habían puesto tanto énfasis en las economías de la guerra. Pero, aún así, economías ilegales y criminalidad organizada se mueven con lógicas distintas de las economías de guerra, porque obedecen a fenómenos y relaciones sociales distintas.

Esta mirada descarnada que despoja de cualquier interés altruista e ideológico a los actores de la guerra hace que toda ilusión sobre la “función positiva de la violencia”, si es que alguna vez la hubo, se haya desvanecido. A los grandes eslóganes como “la violencia partera de la historia”, en el mundo moderno se le pregunta a quienes la promueven si se trata de una historia deseable, o si mucho de lo que se obtiene –con altos costos humanos, económicos y sociales– por métodos violentos, se podría obtener por otros caminos no menos radicales pero con estrategias más inteligentes y más políticas, sin que dejen de ser estrategias revolucionarias, pero acordes con los tiempos de hoy y con las culturas políticas que nos tocó vivir.

Con motivo de la preparación del libro de Martín Kalulambi Pongo, junto con los especialistas en economías de guerra George Elwert, Tristan Landry e Ignacio Nazih Richiani¹, el autor de estas notas preparó lo que serían gruesas tesis para una reflexión comparada entre los dos macro-mercados de violencia de América Latina en los años 80 y 90. El trabajo se hizo más largo de lo planeado y actualmente preparamos un libro sobre el tema, del cual el presente apartado pretende ser el núcleo central del capítulo introductorio.

El presente ensayo desarrolla descriptivamente las características generales de dos grandes bloques de “mercados de violencia” y su articulación con “sistemas de economía de guerra”² en la América Latina de los años 80 y 90 y su relación con los mercados ilegales de las organizaciones criminales: El caso de las guerras de los Andes con su gran epicentro, Colombia, y algunos de sus antecedentes existentes en Centroamérica desde los años ochenta y su desarrollo en los años noventa. Está estructurado en forma de tesis que no se pretende desarrollar sino enunciar e ilustrar con casos o con ejemplos.

La pregunta central es por el proceso histórico de cómo las economías de guerra de Nicaragua, El Salvador y Guatemala se articularon con las de Colombia y Perú, y algunos de sus impactos colaterales.

REVOLUCIONES Y ECONOMÍAS DE GUERRA

Una rápida mirada de contexto a la historia de América Latina nos muestra que las revoluciones son un fenómeno muy extendido

pero que a pesar de los numerosos alzamientos, intentos de revolución, guerras civiles y amotinamientos en el siglo XX³, ninguna otra produjo triunfos revolucionarios con excepción de tres experiencias. Son ellas la larga y violenta Revolución Mexicana, que más que una revolución en *estricto sensu* fue una guerra civil; la corta y focalizada guerra de guerrillas cubana y la revolución nicaragüense, que no logró consolidarse; cada una de ellas imitada en su tiempo. Y a pesar del triunfo, estas tres experiencias tampoco arrojan un resultado válido contundente para mirar con optimismo el siglo XXI. Ni México, Cuba o Nicaragua tienen problemas demasiado distintos a los del resto de América Latina, sin demeritar ni juzgar los logros sociales, que los hay, de cada una de esas experiencias históricas.

En el siglo XXI todo indica que las cosas no serán mejores para los países donde aún persiste la guerra, o aquellos donde puedan estallar este tipo de movimientos revolucionarios en la era global. Los estudiosos de los conflictos armados señalan cambios fundamentales en las formas de persistencia de las guerras de hoy. Para Mary Kaldor⁴, una de las pioneras del estudio de las “nuevas guerras”, la violencia ya no funciona como método para construir estados ni para cambiar el rumbo del desarrollo; por el contrario, termina convirtiéndose en guerra contra la sociedad que dice defender, resaltando su carácter predatorio. Uno de los más importantes “economistas de la guerra”, Paul Collier –luego de observar las tendencias empíricas de todas las guerras internas de los países del mundo entre 1965 y 1999– plantea que el análisis de la guerra y la rebelión no se puede hacer sobre la base de sus discursos políticos, pues “las guerras civiles se producen donde hay organizaciones rebeldes financieramente viables”, mientras que las circunstancias objetivas que generan descontento social (desigualdad, falta de democracia y conflictos étnicos y religiosos) no producen efectos sistemáticos sobre el riesgo de guerra civil, aunque señala un alto riesgo en las sociedades con bajas tasas de cobertura y calidad educativa. Y concluye que los factores que dan cuenta del éxito o el fracaso de los movimientos rebeldes no se deben buscar en las “causas” que los movimientos dicen abrazar sino en sus posibilidades de percibir ingresos⁵.

Aunque no estamos de acuerdo con la totalidad de los planteamientos de quienes, con respetables argumentos e información consistente, tienden a reducir el complejo problema de la rebelión de origen político, ideológico y cultural, a las variables económicas, no deja de ser un tema relevante, fundamental para la interpretación de los fenómenos de violencia, máxime cuando mercados ilegales, criminalidad organizada y organizaciones insurgentes se han entreverado y hoy interactúan de manera cada vez más evidente, haciendo que el umbral difuso de los móviles económicos y de los móviles político-ideológicos



¹ Martín Kalulambi Pongo, ed., *Perspectivas comparadas de mercados de violencia*, Bogotá: Iepri-Alfaomega, 2003.

² Retomamos a Nazih Richiani en su artículo “Between Sustainable Development and War Economies: Paradoxes of Capitalist Development”, mimeo, incluido en el libro mencionado.

³ Si se mira en detalle la cantidad de alzamientos, guerras civiles, guerrillas, intentos de revolución que ha habido en América Latina en el siglo XX, abarcaría prácticamente todo el subcontinente con excepción de muy pocos países. Véase: Daniel Pereira, *Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en América Latina*, Madrid, Libros de la Catarata, 1994.

⁴ Mary Kaldor, *Las nuevas guerras. La violencia organizada en la era global*, Barcelona, Tusquets, 2001.

⁵ Paul Collier, “Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas”, en: revista *El malpensante*, No. 30, Bogotá, mayo-junio de 2001. Este artículo es resumen apretado de Collier e Ibrahim Elbadawi, *Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy*, Development Research Group, World Bank, 2000.

se ensanche de manera inédita en la historia reciente de las guerras. Sin embargo, debemos advertir que la naturaleza y el origen histórico de unos y otros es distinto, así topológicamente se superpongan en los mismos escenarios. Aún hoy, en medio de la confusión, son tipos de fenómenos diferenciables, y analíticamente este es un esfuerzo que tienen que hacer los estudiosos políticos y las ciencias sociales. El esfuerzo teórico para entender las nuevas guerras debe reconocer esta realidad pero no puede olvidar ni desconocer lo que de social y político aún tienen nuestros conflictos, aunque degradados y "ambiguos", como nunca antes, como en el caso colombiano. Álvaro Camacho Guizado resuelve este problema de la siguiente manera cuando afirma:

si bien la presencia y el uso de rentas ilegales... tienden a teñir la actividad guerrillera de ánimo de lucro y codicia, y a desdibujar sus propósitos iniciales... las motivaciones políticas siguen dominando su acción y de allí que considerarlos como simples codiciosos impenitentes conduce a distorsionar su imagen, a alejar las posibilidades de encontrar salidas negociadas al conflicto armado y a proponer alternativas bélicas y no políticas en la confrontación del principal problema político del país⁶.

Hecha esta salvedad, para guardar distancia con esta tendencia a mirar unilateralmente un fenómeno tan complejo como las guerras, desde la economía política, la pregunta que podemos hacernos es ¿si despojamos la guerra de sus demás ropajes, no estaremos incurriendo en una simplificación distorsionante?

La primera tesis es que la economía de una guerra debe estudiarse de manera comprensiva con los grandes propósitos estratégicos de sus autores y no aparte de ellos, ya que las lógicas militares tienen unas lógicas económicas corres-

pondientes. En América Latina han existido economías ilegales que en el desarrollo de guerras civiles prolongadas se han ido incorporando, pero no son los actores de la guerra ni las lógicas militares quienes las han creado, sino que las economías ilegales han sido realidades que están ahí independientemente de las guerras. Éstas las ensanchan y las usan. Ellas simplemente las han incorporado a su repertorio de recursos. Lo que la guerra crea son mercados de violencia, como estructura logística de las grandes estrategias y tácticas militares.

LOS CONCEPTOS BÁSICOS

Si aceptamos la tesis de que la economía de una guerra debe estudiarse de manera comprensiva con los grandes propósitos estratégicos de sus autores, que las lógicas militares tienen unas lógicas económicas correspondientes y que las economías ilegales han sido realidades que están ahí independientemente de las guerras, debemos hacer algunas precisiones conceptuales.

Recientemente varios autores colombianos han introducido el debate de si Colombia vive o no una guerra civil⁷. Como el concepto aparece en el título de este ensayo, vamos a tratar de explicar por qué lo usamos y con qué alcances y limitaciones. Aunque no cabe duda de que Nicaragua y El Salvador vivieron típicas guerras civiles, no es tan unánime que las de Guatemala, Perú y Colombia reúnan todas las características estrictas del concepto. Las definiciones más sólidas señalan algunas características fundamentales para caracterizar un conflicto armado como guerra civil, después de la Segunda Guerra Mundial: a) participación masiva, b) dos o más fuerzas en disputa del poder estatal, una de las cuales es el poder armado del gobierno constituido, c) organización centralizada y estructurada de los contendientes, d) acciones armadas no ocasionales ni espontáneas sino articuladas a planes estratégicos⁸. No obstante, algunos especialistas señalan que el elemento definitorio del carácter de la guerra civil lo da la presencia de la "soberanía escindida": "La guerra civil altera de manera crucial la esencia de la soberanía. En su núcleo se halla la ruptura del monopolio de la violencia legítima por la vía del desafío armado interno"⁹. Es indudable que parcial o totalmente los actores armados en estos países ejercieron, y en el caso colombiano aún ejercen, soberanías parciales en los territorios que dominan, aunque hay que reconocerle a esta guerra una mayor complejidad, que hace que el debate no se agote, donde la ambigüedad es una de sus definiciones. En ese sentido aceptamos el carácter y en este artículo las vamos a denominar indistintamente como guerras civiles en el sentido de guerras internas.

El concepto "mercados de violencia"¹⁰, de origen antropológico, que surge del estudio de las guerras en otras latitudes, puede contribuir a explicarnos la forma como se entrelazan fe-



⁶ Álvaro Camacho, "Creo, necesidad y codicia: Los alimentos de la guerra", en revista *Análisis Político*, No. 46, Bogotá, 2002, pág. 138.

⁷ El debate ha sido secuencial: Fernando Uricoechea, "¿Cuál guerra civil?" en *El Tiempo*, Bogotá, octubre de 2000; William Ramírez, "Violencia, guerra civil, contrato social", en Varios autores, *Colombia cambio de siglo. Balances y perspectivas*, Bogotá, Iepri-Planeta, 2001; Eduardo Posada Carbó, *¿Guerra civil? El lenguaje del conflicto en Colombia*, Bogotá, Libros de Cambio, Alfaomega, 2001. Posteriormente reaccionan en *Análisis Político*, No. 46, mayo-agosto, 2002: Eduardo Pizarro, "Colombia: ¿Guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra antiterrorista o guerra ambigua?", pág. 164 y ss; y el mismo William Ramírez, "¿Guerra civil en Colombia?", pág. 151.

⁸ Peter Waldmann, "Guerra civil: Aproximación a un concepto difícil de formular", en Fernando Reinares y P. Waldmann, *Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Latina*, Barcelona, Paidós, 1999, pág. 27. El autor se apoya en los conceptos que desarrolla el grupo de polemólogos de Hamburgo que dirige K.J. Gantzel.

⁹ Statis Kalivas, "Ethnicity and Civil War Violence: Macro-level Empirical Findings and Macro-level Hypotheses", presentado en la Reunión Anual de la Asociación Americana de Ciencia Política, San Francisco, 2001, pág. 7. Citado por E. Pizarro, *op. cit.*, pág. 171.

¹⁰ El concepto es derivado de la antropología económica. "Los mercados de violencia se entienden como zonas económicas dominadas por guerras civiles, 'los señores de la guerra' o el robo [cualquier tipo de agente depredador que ejerce sistemáticamente la acción], en las cuales surge un sistema que se per-

petúa a sí mismo y que vincula los mercados no violentos de productos con la adquisición violenta de bienes. El intercambio comercial violento y no violento llega a estar tan entrelazado que las oportunidades específicas para obtener ganancias dan la pauta. Debajo de la superficie de la moral, la opinión mundial y conflictos de poder surge un sistema económico que se perpetúa a sí mismo, aún en ausencia de estos intentos para legitimarlo... para resumir, un mercado de violencia es un campo de actividad que se caracteriza principalmente por sus objetivos económicos y cuyas características son el robo, el trueque y las actividades relacionadas como recolección de rescates, dinero de protección, peajes viales, etc.". Georg Elwert, "Mercados de violencia y política de ayuda e intervención", en Martín Kalulambi, *Perspectivas comparadas de mercados de violencia*, Bogotá, Alfaomega, 2003. págs. 4 y 5.

nómenos de diferente origen y naturaleza, que emplean la coerción con diversos fines, móviles o motivaciones, pero cuyos "productos" convergen en un común espacio social: el mercado. El inefable mercado, cuyas redes, una vez los atrapan en sus circuitos y sus vasos comunicantes, unos y otros se convierten en recursos indiferenciados, en mercancías que se entremezclan y circulan unas con otras, perdiendo sus connotaciones éticas o políticas. Donde lo legal, lo ilegal, lo bueno, lo justo o lo malo, lo sucio o lo limpio quedan aplastados por las lógicas económicas que los convierten de diversas formas y por diversos caminos, en bienes o actividades transables. La diferencia con los mercados normales, en tiempos de paz, es que no se trata de un mercado libre de intercambio de bienes y servicios donde la propaganda, la lucha de precios y otros móviles similares son los mecanismos reguladores ante un consumidor libre de escoger. No. Aquí se trata de un mercado regulado por la coacción, la amenaza y el terror¹¹.

Los mercados de violencia en la mayoría de los casos están ligados a guerras en desarrollo, aunque no necesariamente. Muchas veces simplemente a organizaciones armadas en sus zonas de control, sin que exista formalmente una guerra. Por ejemplo en el caso de milicias o pandillas que ejercen el control sobre un territorio. Se diferencian de los mercados ilegales regulados y administrados usualmente por organizaciones criminales que funcionan como una red de individuos u organizaciones cuya finalidad es la realización de actividades ilegales permanentes y sostenidas por "asociaciones criminales especiales que se diferencian de otras expresiones de la criminalidad moderna por mantener una fuerte estructura de poder sobre un territorio"¹², y el ejercicio del monopolio de una actividad o mercancía ilegal, específicamente; denominadas por la tradición italiana como organizaciones de tipo mafioso o "mafias"¹³. Se acerca a la idea de empresario ilegal o "gangsteril", como los empresarios de la coacción. Las economías ilegales se parecen y se complementan con las economías de guerra pero no son lo mismo.

La mayoría de las veces, para que un mercado de violencia sea sostenible debe estar inscrito o ser producto de la guerra. Los bandos de una contienda usan la depredación de quien ha sido declarado como enemigo, primero, y eso ayuda a construir el enemigo; luego se generaliza simplemente a sus zonas de dominio. Inicialmente, suele suceder que se usa como estrategia para debilitar al que en el discurso ha sido designado enemigo, usualmente con criterios ético-políticos o militares, y posteriormente se transforma simplemente en una forma de obtener recursos, a medida que las necesidades materiales y logísticas lo exigen. En las guerras revolucionarias, lo que inicialmente es una lógica política, puede terminar siendo simplemente una logística, sin más. Y este fe-

nómeno se acentúa a medida que la guerra se prolonga, máxime si las lógicas militares se imponen sobre las lógicas políticas. Un supuesto de las guerras revolucionarias es que la revolución o el alzamiento obedece a una "justa causa", lo cual implica legitimarla ante una población y exige unos procedimientos éticos. Pero la guerra suele suplantar a la política y también a sus idearios y rituales.

Si bien "mercados de violencia"¹⁴ y "mercados ilegales" son conceptos parecidos, ambos denotan fenómenos distintos y surgen de tradiciones investigativas diferentes. Pero ¿cómo se define un mercado ilegal? Tal vez la metáfora del juego y la ganancia nos ayude a explicar la diferencia:

cuando, pese a ser prohibidos, determinados bienes y servicios cuentan con demanda entre la población, se crean mercados ilegales en los que se desempeñan empresarios ilegales. Estos empresarios a primera vista no son tan diferentes de sus colegas industriales, tenderos, banqueros y hacendados. Sólo que la ilegalidad cambia las premisas de toda la actividad, de todo el mercado. Las diferencias entre el mercado legal y el ilegal son como las que se dan entre una partida de naipes con baraja francesa y otra con baraja española. Cambian las figuras, cambia la numeración, cambian las reglas, pero al fin de cuentas se trata de lo mismo: ganar el juego, vencer a los competidores y llevarse las apuestas¹⁵.

Nótese que estas actividades se pueden desarrollar con o sin violencia. Esto nos ayuda a diferenciar actores. Mientras las mafias y en general el mundo del crimen organizado "busca vencer a los competidores y llevarse las apuestas", en el mundo de los mercados creados por actores armados, señores de la guerra, etc., o como los denomina Mauricio Romero, "empresarios de la coerción", la ganancia no es el objetivo o al menos no de manera inmediata. Como en todo mercado, hay ganancias, pero ellas no son la lógica de la actividad. La racionalidad, en términos weberianos, es otra. Es ganar la guerra, o hacerla al menos sostenible en las mejores condiciones posibles, pues usualmente se trata de guerras prolongadas. Un juego distinto, en el que el otro juego está inmerso. La ganancia y la violencia son de carácter instrumental, son un medio, no un fin. En el caso de las mafias, la ganancia es lo que la anima, pero también la lealtad, el honor y otros valores significativos y, a mediano plazo, el control de un territorio o de un monopolio, o de ambos.

LAS MUTACIONES

Segunda tesis: Los mercados de violencia se transforman fácilmente en mercados ilegales y viceversa. En antesalas de las guerras y en las posguerras se adaptan también a las más variadas formas de conflictos locales. Un mercado de violencia al final de la guerra simplemente puede y suele descomponerse en múltiples mercados ilegales.



¹¹ Aunque parezca elemental la aclaración, usamos la palabra terror desprovista de las connotaciones ideológicas que ha adquirido después del 11 de septiembre: Acción o serie de acciones sistemáticamente violentas intencionadas a producir miedo intenso en un colectivo o población con un fin determinado.

¹² Hemos retomado y entrelazado algunas ideas propias con las de Darío Betancourt Echeverri. Nos referimos a una *sui generis* forma de relación social que, desde un estricto ámbito sociológico, se asemeja mucho a las formas clásicas gangsteriles italianas o estadounidenses. Darío Betancourt y M. L. García, *Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia social de la mafia colombiana: 1965-1992*, Bogotá, Tercer Mundo Editores. También D. Betancourt, *Mediadores, rebuscadores, traquetos y narcos*, Bogotá, Ed. Anthropos, 1998. Especialmente el segundo capítulo.

¹³ La palabra "mafia" o "mafioso" tiene en español una fuerte valoración negativa que induce a sesgar el análisis. Aunque constituye una categoría de la sociología italiana con la que se denominan estos grupos de poder, la usamos en su acepción equivalente a criminalidad organizada en la tradición norteamericana.

¹⁴ Algunos académicos, principalmente economistas, han caracterizado de ingenuo o inocuo el nuevo concepto. Sin embargo, su validez está en que ayuda a establecer matices entre los fenómenos económicos ligados a la guerra frente a las violencias del crimen organizado y las violencias difusas que obedecen a estrategias delincuenciales o individuales.

¹⁵ Ciro Krauthausen y Luis F. Sarmiento, *Cocalina & Cia. Un mercado ilegal por dentro*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1991, pág. 19. Los autores se apoyan en los conceptos desarrollados por el sociólogo italiano Pino Arlacchi.

Después de las guerras centroamericanas, por ejemplo, especialmente en El Salvador y Guatemala, las inercias mercantiles del conflicto se han prolongado y estos países presentan indicadores de violencias, especialmente en el caso de secuestros y homicidios, y los homicidios por contrato, a veces superiores a los que presentaron durante algunas etapas de la guerra. Nicaragua sigue siendo la sede de numerosas transacciones de armamento que transitan por la cuenca del Caribe, una de las rutas más usadas por los traficantes ilegales de todo tipo desde tiempos inmemoriales. Además, algunos estudios sobre pandillas juveniles muestran que Managua y algunas otras ciudades están alojando no sólo mercados ilegales sino "micro-mercados de violencia barriales" en los territorios dominados por ellas (aunque este podría ser un fenómeno extendido no solamente allí, sino en cualquier territorio donde se asiente una organización criminal). Igualmente en Guatemala y El Salvador. En Medellín después del fracaso del proceso de paz de Belisario Betancur, 1984-1986, las milicias urbanas de los grupos guerrilleros se transformaron en bandas sicariales o pandillas multimodales que controlan un territorio pero venden otro tipo de servicios, además de cobrar impuestos a los comerciantes y casas de apuestas. Lo que inicialmente era un fenómeno político de urbanización de la guerra se transformó en un fenómeno criminal.

Un ejemplo que ilustra el caso inverso podría ser el del surgimiento del grupo paramilitar que dio origen a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, el núcleo alrededor del cual se unificaron las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc. Simplificando la historia, esta organización estuvo conformada en sus orígenes por miembros de una familia de ganaderos cuyo padre es secuestrado y asesinado por las Farc. Algunos de sus hijos se transformaron en narcotraficantes, que de ser leales al cartel de Medellín, posteriormente pasaron, en su enfrentamiento con Pablo Escobar, a ser líderes militares de los "Perseguidos por Pablo Escobar", los "Pepes" (con el apoyo soterrado de diversos agentes estatales, con vínculos internacionales y entrenamiento en Israel), se organizan en "contra-guerrillas" y la familia fundadora, cuyos principales miembros se transforman en "señores de la guerra", mas no en mafiosos como lo serían su antiguo jefe Pablo Escobar o Gonzalo Rodríguez Gacha. Este último, aunque auspició numerosos grupos paramilitares, nunca perdió su carácter de capo del narcotráfico o, como los nombra la prensa gringa, "varones de la droga". Claro está que su condición de jefe de las autodefensas, muy seguramente le proporcionó ventajas a Fidel Castaño, su fundador, y a su clán familiar para fortalecerse y aumentar su poder tanto militar como económico.



Lo cierto es que el emporio creado por Fidel Castaño, el hermano mayor, ha crecido después de su muerte bajo la égida de su hermano Carlos¹⁶. Para ello ha creado su propio "mercado de violencia" fundamentalmente a partir de la "venta" de servicios de seguridad a los finqueros y narcos, creando un mercado de tierras, ganado y secuestrados, entre otros. Cuenta Carlos que su hermano

Fidel inició su actividad con el narcotráfico, luego ejerció la "piratería terrestre" e incluso llegó a tener un depósito de maderas en Bogotá para vender los productos robados en las carreteras.

La motivación central de estos "señores de la guerra", aglutinados en este polo de la contradicción, además de la ganancia y la acumulación, que no están ausentes (y con la salvedad de que esta no es una característica adjudicable por extensión a todos los grupos paramilitares y de autodefensa, que los hay de varios tipos), ha sido la de construir una estrategia contraguerrillera, bien sea por venganza o para la protección de sus intereses o ambos a la vez:

[Fidel] Nunca tuvo ánimos expansionistas –cuenta Carlos Castaño– pero vino el secuestro y asesinato de nuestro padre, y mi hermano cambió. Comenzó el enfrentamiento con la guerrilla y se convirtió en lo que fue, hasta el día de su muerte, una máquina de hacer plata. A partir de ese momento entendí que siempre es más sucio financiar la guerra que hacerla. Tuvimos una mina de oro en Amalfi con papeles y todo, no daba oro, pero justificaba los robos de mercancía que hacía Fidel en Medellín, con un camión que tuvo en compañía... Un día robaban llantas, otro plantas eléctricas, después lotes de motobombas. Con la mina de oro se justificaba la plata y toda se le invertía a la guerra. Robó madera, toda la que quiso. Compraba una buena cantidad en efectivo a buen precio y luego mandaba a unos trabajadores en la noche y se llevaba el resto. Imagínese que llegó a tener una distribuidora de maderas en Bogotá. Hacía lo mismo con piedra 'Peldar' [materia prima para la fabricación de vidrio] y llegó a producir aguardiente en su propio alambique. Era un gran tahúr y robaba jugando cartas al marcar el póker. Se llevaba caballos de una región y los cambiaba con alguien que se los robaba en otra. Como se verá, Fidel fue antisubversivo hasta los tuétanos, pero no tenía todos los escrúpulos¹⁷.

Este testimonio es muy creíble. Pondríamos en duda no los medios sino los fines, aunque no es descartable que estemos ante un auténtico Robin Hood cuyos propósitos sean o la venganza, como en los tiempos de La Violencia sucedió con los llamados "vengadores", o una contraguerrilla ideológico-política o la defensa de intereses de narcos y nuevos ricos, cuyo proceso de acumulación puede verse torpedeado por la presencia guerrillera. O todos ellos juntos.

Lo cierto es que estamos ante un claro fenómeno de acumulación originaria de capital

¹⁶ La historia está ampliamente relatada en Mauricio Aranguren, *Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos*, Bogotá, Editorial Oveja Negra, 2001.

¹⁷ *Op. cit.*, pág. 83.

como resultado del desorden que ha creado esta economía de guerra. Esta es una perfecta descripción etnográfica de un mercado de violencia en formación en el amplio contexto preexistente de un mercado ilegal de productos de la más variada naturaleza. El mercado ilegal de oro no solamente ha financiado a los paramilitares. Recuérdese que el Eln tuvo a su servicio varias minas en el sur del departamento de Bolívar y en la zona de Segovia, en el departamento de Antioquia. Ese mismo mecanismo de lavado ha sido usado por algunos capos esmeralderos en Boyacá, siendo ésta, junto con el contrabando, una de las primeras economías ilegales consolidadas. Mercados similares existen en toda América Latina de los más variados productos. La frontera colombo-venezolana fue durante decenios fuente de mercados ilegales del contrabando de numerosos productos pero el de automóviles robados fue uno de los más rentables.

EL CASO DEL SEQUESTRO

Tercera tesis: El secuestro ha sido una actividad puente entre la ilegalidad y la guerra y una fuente expedita de recursos. Sin profundizar y a manera de ejemplo analicemos el caso del secuestro para establecer las diferencias conceptuales entre un mercado de violencia y un mercado ilegal. En la tradición revolucionaria latinoamericana el secuestro siempre fue un arma política. Se usaba contra grandes enemigos del pueblo y como un instrumento propagandístico. Los Tupamaros en el Uruguay lo usaron contra agentes de la Cia, grandes empresarios, "opresores", torturadores, etc. En la Colombia de los años setenta, lo usó intensivamente con carácter político el M-19 con grandes y espectaculares secuestros, como el del líder sindical, "trai-

dor" de la causa de los trabajadores, José Raquel Mercado, gerentes de multinacionales, la hija de un banquero que hizo operaciones fraudulentas para hurtar el ahorro popular e, incluso, secuestró al gerente de una agroindustria para obligar a negociar un pliego en una huelga; eran personajes con esas connotaciones quienes se hacían merecedores a ir a sus "cárceles del pueblo". Indudablemente muchos secuestros eran únicamente para cobrar el rescate. Ésos ni siquiera se mencionaban ni se aceptaban públicamente, porque el secuestro económico era inaceptable éticamente (en esos tiempos). Pero los tiempos cambian. Hoy el secuestro "revolucionario" es casi un acto rutinario. Se convirtió simplemente en un mecanismo de cobro del "impuesto de guerra" que lo puede pagar el rico, el pobre, el pequeño productor.

En términos generales, en una guerra moderna es casi inevitable el surgimiento de grupos paramilitares o contra guerrillas irregulares y la presencia en una zona de varios grupos a la par que el uso progresivo de métodos similares entre unos y otros, convierte los comportamientos éticos simplemente en ventajas militares o económicas sobre el enemigo o el competidor. El mercado se vuelve más competitivo y el resultado es que el secuestro con fines económicos se ha generalizado. Obviamente, el rico pagará más, el pobre puede "dar uno de sus hijos" para la causa. Las clases medias son parte de las oligarquías en contextos de pobreza y deben vender su automóvil o su casa y dejar sus comodidades. Es el resultado de dos correlaciones: cada grupo según su capacidad de coerción y de hacer creíbles sus amenazas y sanciones y cada uno de los ciudadanos en su jurisdicción, según su capacidad de pago¹⁸.



¹⁸ Las llamadas rentas extorsivas –plagios, 'vacunas' y boleteo– son la principal fuente de financiación de la guerra colombiana. Se calcula en 1.500 millones de dólares los secuestros transados en los últimos años. El negocio es tal que un 22 por ciento de los ingresos de las guerrillas –unos 100 millones de dólares al año– provienen de esa fuente. Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia, 2003, *El Tiempo*, octubre 12/2003, dossier, pág. 18.

Continuando con el secuestro en Colombia, desde los años de La Violencia ha existido como un efecto “bandoleril” y no fue una creación guerrillera. Incluso se hablaba de “la industria del secuestro”. Un famoso mafioso se especializó en esta actividad e incluso se comprobó que la coordinaba desde la cárcel. Su alias era “el doctor secuestro”. Sin embargo, no era un mercado de violencia: era un mercado ilegal. Es la guerra la que lo transforma en un mercado de violencia.

El secuestro es un problema de tal magnitud en cualquier guerra actual que se ha transformado en un mercado multinacional. Los seguros para ingenieros, técnicos y ejecutivos de multinacionales en zonas de conflicto se convirtieron en un estímulo para su práctica, pues ha encarecido los rescates y se ha transformado en una transacción normal entre negociadores, que multiplican su capacidad de pago, en moneda extranjera y sin regateos innecesarios. Mercenarios internacionales y expertos en seguridad se han convertido en mediadores y negociadores para las compañías aseguradoras y reaseguradoras.

El desarrollo reciente en guerras con multiplicidad de actores, la proliferación del rapto y la extorsión ha hecho que sea difícil de distinguir cuándo un secuestro es realizado por móviles políticos y cuándo por móviles económicos. Y peor aún, cuando lo realiza un grupo armado como las guerrillas o los paramilitares (hubo momentos en los años 80 en que tampoco se podía definir si lo realizaba un actor institucional, en muchos países de la región), pues el mercado del secuestro ha articulado los circuitos de la delincuencia común con las redes de finanzas de las guerrillas o algunos grupos paramilitares. Y muchas pequeñas bandas de delincuentes encuentran rentable “venderle” sus secuestrados a frentes guerrilleros, en un tráfico macabro que los investigadores académicos por mucho tiempo nos negamos a creer pero que las investigaciones policiales han hecho cada vez más evidente.



LA GUERRA DEL PETRÓLEO

Cuarta tesis: Los recursos naturales también se convierten en recurso de la guerra. Así mismo, la infraestructura, los circuitos de transporte que irrigan un territorio, son casi un recurso natural. (Carreteras, oleoductos, redes eléctricas, torres y estaciones de comunicaciones, etc.) Uno de los negocios más florecientes con que los paramilitares y guerrillas se lucraron durante varios lustros en Colombia gravitó alrededor de la industria del petróleo. Varios casos pueden ilustrar esta situación.

El primero es el de la Manessman. En 1973 en la llamada “operación Anorí” las fuerzas militares prácticamente aniquilaron al Eln, que quedó reducido en su estructura militar a algo menos de 50 hombres-arma. Sin embargo, uno

de sus reductos quedó en Arauca, departamento limítrofe con Venezuela. La exploración de uno de los campos más productivos, el de Caño Limón, y los pagos que las compañías hicieron por secuestros y licencias para trabajar en la zona, reactivaron, refinanciaron y rearmaron a esta agrupación, que se ganó la lotería con la empresa alemana Manessman, constructora del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que pagó, según varias versiones, entre 50 y 200 millones de dólares.

El segundo caso es el del mercado ilegal de combustibles robados a la empresa estatal Ecopetrol. La impunidad con que actuaban los “vampiros” que instalaban válvulas en los poliductos y vendían gasolina y derivados extraídos en esta forma hizo y hace de éste uno de los robos continuados más grandes de la historia del país. Para algunos habitantes de la región de Barrancabermeja (la más importante ciudad de la gran región selvática interior del Magdalena Medio y sede de la refinería, y que durante muchos años fue bastión histórico del Eln) el Eln fue el primero en usufructuar esta fuente de recursos. Posteriormente se cree que los paramilitares lograron su monopolio. Para algunas personas este hecho fue algo tolerado, bien sea por corrupción dentro de la empresa o, según otras versiones, el pago de los servicios de seguridad y contrainsurgencia por parte de los poderosos servicios de seguridad de la empresa. Lo cierto es que con estos recursos florecieron los grupos paramilitares; y en los últimos años la ciudad de Barrancabermeja se encuentra controlada por las Auc con la colaboración de algunos ex guerrilleros.

El tercer caso es el de los atentados contra los oleoductos. La táctica diseñada inicialmente por el Eln y luego adoptada por las Farc advirtiendo la defensa de los recursos naturales frente a las empresas multinacionales, introdujo a partir de 1986 de manera intensiva y directa al medio ambiente en la guerra. Además del impacto ambiental inherente a la actividad petrolera, en las condiciones de Colombia, donde al escaso control del Estado sobre la actividad de las empresas exploradoras y productoras, se ha agregado el hecho de que los oleoductos y las instalaciones petroleras hayan sido declaradas objetivo militar por las mencionadas organizaciones. Para ilustrar el daño, de 1986 a junio de 2003 se habían provocado 1.147 atentados contra los oleoductos e instalaciones petroleras. La infraestructura más afectada ha sido la de Caño Limón-Coveñas que atraviesa desde el oriente en Arauca, hasta el puerto especializado de Coveñas en el mar Caribe, pero también los oleoductos El Vasconia-Coveñas, el Transandino y La Línea Putumayo entre otras instalaciones. Estos atentados han afectado ríos, ciénagas, caños y en general cuerpos de agua y centenares de hectáreas de terrenos ubicados en los departamentos de Antioquia,

Arauca, Cesar, Nariño, Norte de Santander, Santander, Putumayo y Boyacá, entre otros. Según la Policía Nacional, a partir de 1993 las Farc imitaron las acciones del Eln y entre 1993 y el presente se le atribuyen más atentados a esta agrupación¹⁹. Lo cierto es que Colombia ha derramado desde 1986 una cifra descomunal, cercana a los 3 millones de barriles de petróleo²⁰. Otro récord vergonzoso pesa sobre nuestra responsabilidad histórica ante el mundo: los derrames de petróleo que se han dado en nuestro país a causa de los atentados contra los oleoductos exceden en más de 12 veces el crudo derramado en el mayor incidente puntual de contaminación de petróleo en el mundo, el buque tanque Exxon Valdez, en Alaska²¹.

Las compañías contratistas deben emplear a personas de la región para hacer las reparaciones otorgando la primera ganancia en forma de apoyo a la población rural, que se constituye así en base social de las guerrillas. Por otra parte, cada contrato significa un porcentaje para el grupo guerrillero en forma de impuesto de guerra.

MERCADOS DE VIOLENCIA

SIN GUERRA CIVIL: EL CASO MEXICANO

Quinta tesis dice que no necesariamente los mercados de violencia surgen en países en guerra. Otro ejemplo de países que no están en guerra y tienen sin embargo mercados ilegales y mercados de violencia articulados es México. Además de ser la sede de 3 a 5 pequeñas guerrillas locales, donde los zapatistas son la más conocida pero no la única, y aunque está lejos de ser un país en guerra civil, aloja en su territorio algunos de los grupos mafiosos más importantes del continente que paulatinamente se están articulando con grupos de justicia privada y organizaciones paramilitares para contener la expansión de esas guerrillas locales. Las autoridades mexicanas hablan de al menos siete grandes carteles. Estas siete organizaciones incluyen a cuatro ya tradicionales: los carteles de Juárez, del Golfo, de Tijuana y de Sinaloa, además de otras tres relativamente nuevas o cuyas actividades apenas se conocían: el cartel de los hermanos Amézcuca, el de los Valencia y el de los Díaz Parada²².

Estos núcleos mafiosos están en expansión luego de desplazar el monopolio que tenían los carteles colombianos de la cocaína y transitan hacia la consolidación de mercados que cada vez se articulan más a los diferentes circuitos centroamericanos. Articulan actividades permanentes muy variadas –algunas de ellas con mucha o poca relación directa con la guerra misma– tales como tráfico de armas, justicia privada local, sicariato, tráfico de drogas, tráfico de personas en el flujo de ilegales a través de la amplia frontera con

los Estados Unidos y el desarrollo del secuestro y la extorsión a amplia escala²³.

Pero volviendo al tema de las guerrillas, los diferentes gobiernos mantienen este tema con bajo perfil. En los meses de abril y mayo del 2000 hubo mucha actividad de varias de ellas. El poblado de Xochimilco, una de las colonias del Distrito Federal, la capital, fue escenario de presencia guerrillera dos meses antes de la elección del presidente Vicente Fox. La prensa presenta esporádicamente noticias de guerrillas en el estado de Guerrero, en Michoacán y en Oaxaca, entre otras zonas. Una de las más activas es el Ejército Popular Revolucionario, EPR, que según los pobladores opera en Michoacán desde 1997. John Dawson, entonces director de la Oficina de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado, declaró entonces, luego de terminar una visita oficial en la que los temas centrales fueron las guerrillas y el narcotráfico: "Las elecciones [presidenciales del año 2000 que ganó el presidente Fox] en México no serán afectadas por la existencia de grupos guerrilleros... lo percibimos como un asunto "completamente doméstico"... es un problema que es responsabilidad del gobierno mexicano [en los últimos meses del PRI] y tenemos toda la confianza de que es algo que sí puede resolver... y no vamos a meternos en eso"²⁴. Como en el caso colombiano, la presencia de guerrillas que coexisten, cooperan o compiten y se enfrentan con empresarios ilegales, se necesita información detallada para poder establecer hasta qué punto los mercados de violencia se han integrado funcionalmente con los mercados ilegales. La diferencia es que las guerrillas mexicanas no tienen la presencia, tradición, fortaleza y grado de consolidación territorial y militar que las colombianas.

Otro caso es el tráfico de personas. Llama la atención de la situación mexicana



¹⁹ Policía Nacional, Dijn, Centro de Investigaciones Criminales, *Casos de terrorismo a oleoductos*, 1993-1996. Citado por José Fernando Castro, *En defensa del pueblo acusa. Impacto de las voladuras de oleoductos en Colombia*, Bogotá, Tercer Mundo Editores-Defensoría del Pueblo, 1986, pág. 16. Datos complementados y actualizados por el autor con base en informes de Ecopetrol-DNP-Ministerio de Defensa.

²⁰ Entre 1986 y julio del 2001 se derramaron un total de 2'800.100 barriles a causa de los atentados de las guerrillas.

²¹ Durante más de tres lustros estos actores armados pudieron rutinariamente realizar atentados con tan fatal resultado. Tal parece que solamente el doloroso error ocasionado por un atentado en el amanecer del domingo

18 de octubre de 1998, cuando el petróleo derramado ocasionó el incendio del caserío de Machuca en el municipio de Segovia, Antioquia, en el cual murieron más de sesenta personas y quedaron numerosos quemados, le recordó al país que este método de guerra se ha usado en tantas ocasiones que ya no es nada extraordinario y que no ha habido una sociedad civil crítica capaz de pasar la cuenta de cobro, ni un movimiento ambientalista suficientemente crítico para pronunciarse por estos excesos. Tampoco una izquierda crítica capaz de cuestionar estos métodos revolucionarios.

²² Así lo señaló el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (Uedo) de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, en declaraciones que publica el diario

El Universal, México, 20 de abril de 2003. "Siete carteles se reparten el control de las drogas en México", *EL Espectador*, Bogotá, 21 de abril de 2003.

²³ Recientemente se ha sumado una nueva actividad: suministro de mujeres jóvenes para el placer sexual que culmina con excesos que incluyen el asesinato de la acompañante, especialmente en las zonas de frontera con Estados Unidos.

²⁴ Véase: Agustín Ambríz y Francisco Castellanos, "Las guerrillas en México no afectarán las elecciones" y "Nuevos signos de guerrilla en Michoacán", en revista *Proceso*, México, D.F., No. 1.219, marzo 12 de 2000, págs. 22-24. La posición contrasta con la adoptada frente al caso colombiano.

na, que articula el mercado ilegal con la violencia; frecuentemente las crónicas de prensa han señalado tráfico de personas, no solamente mexicanas, sino que, además, durante las guerras centroamericanas se dio un significativo tráfico de personas oriundas de Guatemala o El Salvador cuyos contactos iniciales fueron los vendedores de armas o narcotraficantes que enlazaban con los “coyotes” o guías para atravesar el desierto por unos miles de dólares para huir de la guerra o de la miseria hacia los Estados Unidos.

Recientemente las organizaciones de derechos humanos han denunciado con insistencia un caso extremo, el caso de Ciudad Juárez en la frontera, donde desde 1993 han muerto al menos 370 mujeres, muchas de ellas violadas previamente, y entre 400 y 800 desaparecidas.

La violencia en Ciudad Juárez es, sin duda, una situación a la que se enfrentan a diario tanto hombres como mujeres. Sin embargo, desde 1989 se comenzó a observar el aumento de los asesinatos violentos en contra de mujeres. En 1993 la situación se agravó... desde enero de 1993 hasta enero de 2002, aproximadamente 268 mujeres fueron asesinadas con una violencia brutal sin que hasta el momento se hayan podido esclarecer los hechos y frenar los asesinatos. Según la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, de los 268 [según Amnistía Internacional son 370] casos registrados, 76 son los que corresponden al “tipo multihomicida” mientras que los demás están clasificados como de “tipo situacional” (pasionales, narcotráfico, robo, sexuales, riña, intra familiares, por venganza, imprudenciales)... y esto sin contemplar los numerosos casos que existen de mujeres desaparecidas. Respecto de los asesinatos “multihomicidas” la situación es muy grave, ya que a pesar de las declaraciones de la Procuraduría Estatal de que muchos de éstos “ya han sido resueltos”, lo cierto es que [...] sólo hay una persona sentenciada por uno de los crímenes; [...] la mayoría de las víctimas eran mujeres y niñas entre los 15 y 25 años, casi todas ellas migrantes y trabajadoras de la industria maquiladora o de pequeñas tiendas. El móvil ha pasado por varios escenarios, desde el tráfico de órganos hasta el narcotráfico o la trata de mujeres, pero hasta el momento no se ha podido esclarecer cuál es la verdadera causa de los asesinatos²⁵.

Ello sólo es explicable, como lo dice el informe, por la convergencia de varias circunstancias, la más notoria de ellas la impunidad e ilegalidad, y por un “clima” social creado por el masivo tráfico de personas, con la tolerancia de las autoridades. Habría que establecer en este caso, los lugares de procedencia y posibles motivos de migración entre otros detalles, para establecer hasta qué punto este tráfico está articulado con situaciones de coacción. Dos cosas quedan claras de la información disponible: hay un tráfico “legal” hacia las “maquilas” o empresas multinacionales de las zonas francas para utilizar intensivamente mano de obra barata sin garantías laborales, al lado del cual florece el tráfico ilegal. Se ha comprobado que un alto porcentaje está cons-

tituido por migrantes, donde el desarraigo familiar facilita la impunidad. Estudios preliminares suponen que la ausencia de ley ha propiciado al parecer un mercado mafioso del ritual del placer masculino que incluye la crueldad extrema y la muerte de la víctima, como una especie de entrenamiento o iniciación para el ejercicio de la violencia en otros campos más “productivos”.

No obstante, reiteramos, México está lejos de ser un país en estado de guerra pero hasta allí llegaron las redes mercantiles de las guerras centroamericanas de los decenios anteriores y el brazo largo del narcotráfico y otros mercados ilegales que consolidan de manera acelerada la tendencia al crecimiento de los indicadores de corrupción estatal y de violencia. Aunque no alcanza a configurar nítidamente un “mercado de violencia”, tiene las condiciones para llegar a serlo.

LOS PARAÍDOS FISCALES, CORRUPCIÓN E ILEGALIDAD

Sexta tesis: Los mercados ilegales son ambientes propicios que hacen funcionales los tráficoes proclives al desarrollo de las guerras. Los grandes insumos de las guerras se mueven más allá de los mercados locales y se articulan a fenómenos de corrupción de estados y paraísos fiscales, donde medianos o grandes capitales “capturan” a los funcionarios para obtener ventajas ilegales y legislaciones favorables, articulándose a las economías de guerra de la región. Los casos de las Bahamas, Centroamérica y Colombia, Perú y la zona andina, podrían ilustrar este problema, en diferentes modalidades e intensidades.

El primer caso, a manera de ejemplo, es el de las Bahamas. Allí el mafioso colombiano Carlos Lehder, el primer capo colombiano internacional en el negocio de la cocaína, señala cómo se fue a las Bahamas, “una democracia maravillosa”, compró por un millón de dólares la isla Norman’s Cay (y tal vez en mucho menos a sus autoridades) y desde allí construyó su imperio que luego dio origen a los llamados “carteles”, con la convergencia de otras circunstancias favorables²⁶. Para ello necesitó además de ciertas condiciones en Colombia, Bolivia y Perú. Su papel en la protohistoria de los carteles es tan importante como el papel de Gonzalo Rodríguez Gacha, quien se establece en el estado de Sonora, en México, para introducir desde allí primero marihuana de la Guajira colombiana y luego cocaína a los Estados Unidos. Sin estas “cabezas de playa”, que permitían el monopolio directo de las fases más rentables del negocio, muy seguramente no se podría dar el proceso de acumulación y el lugar privilegiado en las estructuras empresariales ilegales. Y ello era posible únicamente con climas de tolerancia hacia lo ilegal en Colombia, en el lugar intermedio llámese Bahamas o México, para estos dos casos, y en el país de

²⁵ Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), “Violencia contra las mujeres en Ciudad de Juárez, México”, en Comisión de Derechos Humanos, 59 Sesión, 17 de marzo-25 de abril, Ginebra, 2003.

destino, Estados Unidos. Aunque poco se ha estudiado el mercado ilegal norteamericano, es apenas lógico que el sistema que articula la demanda y la convierte en mercado, es el eslabón más importante de la cadena. Lamentablemente es el menos estudiado. Si no fuera por el llamado "escándalo Irán-Contras" que permitió comprobar un negocio de drogas y armas a gran escala entre 1984-1985 con el apoyo de importantes funcionarios del gobierno estadounidense, no se sabría mucho de éste, repetimos, el principal eslabón de este macromercado ilegal²⁷.

Otro caso directamente ligado con el anterior, es el del surgimiento de los carteles de las drogas. Los carteles colombianos no hubieran podido surgir sin unas condiciones de ilegalidad privilegiadas y otras circunstancias de diferente naturaleza. En primer lugar unas precondiciones: la acumulación y el aprendizaje realizado con tres economías ilegales toleradas: la bonanza marimbera, la economía del contrabando y la explotación ilegal y el tráfico internacional de esmeraldas. En segundo lugar, niveles de corrupción y tolerancia suficientes para que los empresarios ilegales pudieran moverse con solvencia. En tercer lugar, legislación fiscal y cambiaria favorables. Sobre esas precondiciones, el florecimiento de la industria supuso: el control de la cadena desde la producción de pasta básica en Bolivia y Perú, condiciones para transportarla a los laboratorios o "cristalizaderos" en las selvas colombianas, sitios de tránsito y abastecimiento en Centroamérica, el Caribe y México. Pero ante todo, un gran mercado con una importante demanda en expansión: las principales ciudades estadounidenses y las redes para atenderlo con suministros al por mayor y redes mino-

ristas. Así mismo, un mercado libre de capitales de retorno y de compra de insumos precursores, especialmente químicos, necesarios para el procesamiento.

Sin embargo, el hecho que dinamizó y articuló todas las cadenas fue el sistema económico de las guerras civiles centroamericanas que crearon las oportunidades para hacer grandes negocios no sólo de drogas sino de armas. Es decir, Centroamérica conformó en el período de la guerra desde los 70 hasta 1992 un sistema de economías de guerra que terminó con las negociaciones de paz; sin embargo, la inercia de los mercados de violencia aún se prolongó una década después transformados en mercados ilegales, que luego se han articulado con los mercados de las guerras suramericanas. Y ése es el comienzo de otra cadena.

Este caso tiene una evolución importante, que pone fin a la etapa de los carteles colombianos. Con la muerte de Rodríguez Gacha, "el Mexicano", en diciembre de 1989, y la de Pablo Escobar en 1993, la captura, prisión y guerra interna de los capos del Valle en 1994-1995 termina el capítulo de los grandes carteles colombianos y empieza el de otros. Se habla de brasileños, pero sobre todo de los siete carteles mexicanos. Las recientes investigaciones policiales como la "operación Milenio" han demostrado que los carteles emergentes de la derrota de los grandes capos colombianos ahora son subalternos de los siete grandes carteles mexicanos.

El otro caso, el del segundo "macro-mercado" de violencia que articula un amplio territorio de la zona andina, se ubica en la ruta de la coca alrededor de las guerras colombiana y peruana en los años 80 y 90, involucrando nuevos

²⁶ Milène Sauloy e Yves Le Boniec, *¿A quién beneficia la cocaína?*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1994, pág. 21.

²⁷ Es sorprendente cómo este debate se ha evitado en Colombia tanto en círculos políticos como académicos. Mientras en los Estados Unidos han aparecido importantes libros y artículos (entre otros: "Narcotics, Traffickers and The Contras", en Subcommittee on Terrorism Narcotics and International Operations, of the Committee on Foreign Relations, US Senate, *Drugs, Law Enforcement and Foreign Policy*, US Government Printing Office, Washington, 1989. "America has fought the Wrong War" (America ha luchado una guerra equivocada), en *The Independent*, 26 de agosto de 1989; P.D. Scott y J. Marshall, *Cocaine Politics: Drugs, Armies, and the CIA in Central America*, University of California Press, Berkeley, 1998; G. Webb, *Dark Alliance: the CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion, Seven Stories*, Nueva York, 1998; Patrick L. Clawson & Rensselaer W. Lee III, *The Andean Cocaine Industry*, Houndsmills, Macmillan, 1996. La senadora Dianne Feinstein afirmó que "la integridad de nuestro sistema de justicia está de por medio. Es completamente inaceptable que [el gobierno de] Estados Unidos haya estado involucrado en el tráfico de drogas en nuestras fronteras", y solicitó una investigación a la entonces Procuradora Janet Reno al tiempo que denominó este episodio como "el peor abuso oficial de la historia de los Estados Unidos". Entre tanto, en algunos círculos académicos especializados en Colombia han tildado este debate como "una novela" escrita desde la teoría del complot.



circuitos mercantiles especialmente con Bolivia, incorpora a países como Ecuador, Brasil y Venezuela, principalmente, en lo referente al gran mercado de la cocaína; que a su vez incluye el mercado de armas, municiones y explosivos. Tanto en Bolivia como en Perú se han formado grandes circuitos de coca, en Perú y Ecuador de coca y armas. Pero su lugar en la cadena hacia los mercados finales les ha restado importancia y visibilidad, es decir, capacidad de acumulación. No obstante, el caso Fujimori-Montesinos muestra que el mercado peruano es más importante de lo que se ha dicho y conocido hasta ahora.

El otro caso que ilustra la tesis es el de Ecuador. Este gran sistema mercantil involucra de manera muy directa a Ecuador, a pesar de ser un país aparentemente lejano en términos de indicadores de violencia. Aunque se tiene poca información, cada vez es más evidente que este país es sede de un mercado de armas y explosivos cada vez más funcional a las violencias del narcotráfico de Bolivia y Perú y a la guerra de Colombia, en el seno de sus propias autoridades militares y de policía. Sin embargo, Ecuador, a pesar de la profunda crisis económica y social y la inestabilidad política, está lejos de estar en guerra (al menos en el momento de escribir este artículo).

UN MERCADO EN EXPANSIÓN

O LA INTERNACIONALIZACIÓN PERVERSA

Séptima tesis: Los mercados de violencia crean estructuras de oportunidades que a su vez se convierten en uno de los mecanismos de expansión del conflicto: el mercado de violencia es uno de los mecanismos que permiten que la guerra se expanda.

De una u otra forma toda la región –principalmente Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, países con los cuales Colombia tiene extensas y lejanas fronteras, y Bolivia–, participa de mercados ilegales y algunos de los mercados de violencia en expansión de la guerra colombiana. Además de participar en el de drogas e insumos para su producción, oro, gasolina, entre otros, estos países participan en algún tráfico de armas, municiones y explosivos y otras mercancías ilegales, cuyos mercaderes encuentran oportunidades en la guerra colombiana. No pocas veces los actores del conflicto colombiano han realizado prácticas de secuestros, negocios y hostilidades en sus territorios. A comienzos del siglo XXI, analistas y gobernantes temen la expansión de la guerra hacia los países vecinos y todos los gobiernos del área han tomado medidas para evitar una especie de “contaminación” del conflicto.

Todos los vecinos sin excepción –y muchos de los no vecinos remotos y de otros continentes– han tomado medidas para impedir la entrada de la diáspora colombiana que sobrepasa el 10% de su población de 44,4 millones y

que internamente ha generado más de 2'500.000 desplazados internos en los últimos diez años.

En muchos países –insistimos, no solamente en los próximos– la prensa habla de la “colombianización” en términos negativos. Y es indudable que el proceso colombiano de los últimos 20 años no es deseable. Sin embargo, muchos de los gobiernos y sociedades que así se expresan no han dejado de involucrarse en las oportunidades y negocios de esta guerra. No renuncian a tomar parte de los negocios en expansión de este gran “mercado” que en últimas es el que expande la violencia. Dicho de otra forma: la guerra colombiana se expande no en forma de guerra, sino en forma de mercado de violencia y de tráfico ilegales. Esta situación hace cada vez más complejo el problema de la región.

Por ejemplo, en 1999 el entonces presidente del Perú Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos trataron de articular un plan continental, en numerosas ocasiones con el también presidente argentino Carlos Menem, para evitar la expansión de la guerra colombiana hacia los demás países del área. Ante el Instituto Interamericano de Defensa en Washington llegaron a proponer la formación de un ejército de intervención en 1999. Luego se ha sabido que estos tres personajes han estado involucrados en tráfico ilegales o encubiertos de armas hacia países de la zona. Menem en tráfico de armas hacia Ecuador y Montesinos en la venta de 70.000 fusiles a las Farc, de los cuales se entregaron 10.000.

Los gobiernos y las sociedades de la región deben tener claro que estas guerras no se expanden en forma de ejércitos imperiales que invaden países, a la manera napoleónica o hitleriana. Habría tres formas principalmente de expansión de la guerra: por la vía de los sistemas de economías de guerra que le hacen de combustible e involucran en sus mercados de violencia (secuestros, reclutamientos y otros tráfico). Otro camino es por la vía política (como parece ser el caso venezolano). Otro, es que la frontera se puede transformar en retaguardia estratégica que también puede involucrar los territorios de sus países por la vía militar, en doble vía: secuestro, extorsión y reclutamiento en el país vecino y paso de la frontera donde la autoridad del país no puede llegar, y refugio y avituallamiento al otro lado, donde la autoridad colombiana tampoco puede llegar, convirtiendo las zonas limítrofes en fronteras calientes.

Es inevitable dado el tamaño de las economías de guerra en expansión que impacten a una región que ha tenido grandes problemas de inserción en la economía global y cuyas economías muy similares se caracterizan por la volatilidad, la incertidumbre, altos niveles de desempleo y grandes desequilibrios fiscales, además de una historia de debilidad estatal,

corrupción y deuda social no resuelta, donde importantes fuerzas sociales y políticas no ocultan sus simpatías por las fuerzas insurreccionales izquierdistas colombianas o con las contraguerrillas derechistas.

GLOBALIZACIÓN Y GUERRA CIVIL EN LOS AÑOS NOVENTA

Octava tesis: Después del derrumbe del muro de Berlín y la caída de la URSS, en América Latina se descongelaron rápidamente los bloques de la Guerra Fría, y la redefinición mundial que sobrevino tuvo repercusiones casi inmediatas sobre los sistemas de guerra, creándose, en el caso de las guerras centroamericanas, una excepcional coyuntura favorable para un rápido proceso de paz, especialmente en Guatemala y El Salvador, pero con repercusiones en países con conflictos sociales y políticos agudos como Honduras y Nicaragua²⁸. Estas repercusiones, que en el caso mencionado de Centroamérica o en conflictos como el de Sudáfrica, fueron positivas y distensionantes para la solución final de los conflictos –y así lo reconocen los principales estudiosos para cada uno de los casos–, paradójicamente en el complejo nudo gordiano de las dos guerras suramericanas de Perú y Colombia el efecto fue contrario.

En el caso de Colombia, una de las guerras más antiguas del planeta, considerada como típico conflicto de la posguerra mundial por el alineamiento de las fuerzas políticas y militares con cada uno de los campos del mundo bipolar, y en el caso peruano un proceso similar de guerrillas no consolidadas en los años sesenta y setenta que se consolidan en los ochenta pero sin el grado de inserción y desarrollo de las guerrillas “históricas” del primero.

En ambos países habían emergido guerrillas, que desde los años sesenta habían sido vistas con indiferencia, se desarrollaron en los ochenta pero una vez sobrevino el derrumbe del muro de Berlín, por contraste con el caso centroamericano, las nuevas circunstancias reforzaron los conflictos y aceleraron los procesos económicos y políticos alrededor de la guerra. La oleada de la globalización que sobrevino reforzó, fortaleció y ayudó a consolidar los sistemas de economías de guerra. Uno de ellos –el peruano– se resolvió militarmente (no obstante que a partir del año 2002 las guerrillas parecen haberse reactivado al contar con factores propicios producto de la profunda crisis política y social que se ha presentado con motivo de los escándalos de corrupción que llevaron a la renuncia de Fujimori, al juzgamiento de su asesor Montesinos y a la elección y crisis de gobernabilidad del presidente Toledo, sumado a la profunda crisis económica que vive la región), en tanto que en Colombia está más lejos de su resolución. Algo similar sucede ac-

tualmente con las guerras del petróleo en Asia o con las guerras del petróleo, el oro y los diamantes en África²⁹.

Uno de los factores decisivos que podría explicar esta aceleración del conflicto es el entreveramiento de la guerra antidrogas, dominante en la política mundial, con los movimientos insurgentes o contrainsurgentes. La mezcla de los recursos de la coca con el fundamentalismo maoísta de Sendero Luminoso y con el movimiento de las “rondas campesinas” y los Comités de Defensa Civil, Cdc, en Perú, o con las estructuras militares de Farc y Eln, y la unificación de un ejército paramilitar de extrema derecha, las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, elevaron hasta el límite los niveles de la confrontación, contando siempre con abundantes fuentes de recursos para su financiación a partir de cobros coactivos y tráfico ilegales.

Matizando el caso colombiano, hubo el mismo “efecto centroamericano” pero de manera ambigua. Es decir, también se dio el efecto distensionante de manera parcial, situación que ha sido invisibilizada por el crecimiento de las dos guerrillas mayores: también en un rápido e inesperado proceso de paz los movimientos 19 de abril, M-19, una fracción mayoritaria del Ejército Popular de Liberación, Epl, de orientación maoísta, una disidencia del Eln, la Corriente de Renovación Socialista, y el indigenista Movimiento Armado Quintín Lame, se acogieron a un proceso de paz, que se dio alrededor de una importante reforma política realizada en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente que realizó la más destacable apertura democrática que haya vivido este país desde 1886 cuando se aprobó una constitución centralista, conservadora y clerical y, en nuestra opinión, con muchos rasgos autoritarios. La constituyente de 1991 fue diseñada como un gran proceso de paz en medio de una gran crisis en la que el Cartel de Medellín lanzó la más grande ofensiva terrorista contra el tratado de extradición, que comenzó primero contra el poder judicial y la prensa y terminó en el asesinato de cuatro candidatos a la presidencia, entre ellos el virtual presidente y candidato oficial del partido mayoritario, el liberal y carismático Luis Carlos Galán Sarmiento. La estrategia incluyente fracasó en gran parte porque el mismo día que se elegía a la Asamblea Nacional Constituyente, el ejército colombiano en un aparatoso y publicitado operativo asaltó la zona desmilitarizada concedida a las Farc desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) para adelantar un proceso de paz³⁰.

Es decir que la globalización actuó sobre las sociedades en guerra de manera diversa y contradictoria, según el caso. Allí donde se articularon economías de guerra y mercados de violencia consolidados, los conflictos se hicieron de muy difícil solución o se agudizaron y en



²⁸ Esta es la principal conclusión de una reunión de trabajo del Iepri con el investigador francés Frédéric Massé, del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo –UAED–, Bogotá, sobre el papel de las Naciones Unidas en el proceso de paz en El Salvador. Bogotá, junio de 2002. Véase también del mismo Massé: “De la violencia a lo político, ¿una reconversión lograda? El caso de El Salvador”, en *Análisis Político*, No. 36, Bogotá, enero-abril de 1999.

²⁹ Véase Martín Kalulambi Pongo, *op. cit.*

³⁰ Pocos estudios se han hecho sobre este conjunto de procesos de los años ochenta y su culminación en la Constituyente. Sobre los casos de desmovilización de las guerrillas menores, el más importante es el de Ricardo Peñaranda y J. Guerrero, eds., *De las armas a la política*, Bogotá, Tercer Mundo Editores-Iepri, 1999.

algunos casos constituyeron verdaderas situaciones de *statu quo* donde la violencia es el elemento articulador de un "orden" estable de dinámicas de guerra en equilibrio.

Tal vez ese sea el caso de Colombia. Varios factores explican esa continuidad y excepcionalidad, pero casi todos los analistas coinciden en buscar la explicación en la presencia de varias economías ilegales que se han articulado complejamente y donde la matriz de todos los canales mercantiles está atravesada por el mercado mundial de la cocaína (y de sus colaterales la marihuana y de otras drogas psicoactivas como las opiáceas derivadas de la amapola, especialmente la morfina y la heroína), articulados estrechamente al mercado de armas, de precursores químicos, y sus necesarias asociaciones de corrupción de autoridades, lógicas que conducen y condicionan los intereses de los actores de la guerra.

LA ARTICULACIÓN DE LOS CIRCUITOS

Novena tesis: La dinámica de la guerra centroamericana aceleró los circuitos mercantiles y los articuló con las dinámicas de las guerras suramericanas. Lo que pasaba en Centroamérica no tenía mayor conexión con lo que sucedía en Suramérica. Además del impacto político del auge guerrillero, los circuitos de la guerra centroamericana no tenían más conectores que los normales: apoyo cubano, cuya economía cada vez era más dependiente y débil, respaldo retórico y moral de la URSS, que para entonces tenía muchos problemas en su entorno asiático para poder atender a los frentes de ultramar, gran crisis económica por los precios del petróleo y el aumento de los intereses y el capital de la deuda externa de mu-

chos países de la región. El presidente Belisario Betancur en Colombia, Alan García en el Perú y Enrique Roldós en Ecuador trataban de enfrentar la crisis de la deuda externa creando un club de deudores después de que la economía mexicana estuviera al borde del colapso en 1982. América Latina estaba en total ebullición, mientras el presidente Reagan invadía la minúscula república de Grenada, en el Caribe.

En los años ochenta todo parece acelerar los acontecimientos y la violencia es un fenómeno extendido sobre la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Los países que mantenían guerrillas pasan a estados de guerra abierta. Las principales organizaciones armadas crecían como nunca antes: el clima de la guerra fría se expresaba a través de numerosos conflictos de "baja intensidad" hasta que la articulación de verdaderos sistemas de guerra tornó incontenible el incendio centroamericano y en Suramérica las guerrillas colombianas y peruanas tomaron dimensiones como nunca antes en la historia continental. Un efecto similar al de la Revolución Cubana en los años 60 se desataba veinte años después a raíz de la revolución sandinista. Pero tal vez el afán de diseñar una política de contención en el ámbito continental llevó a la intervención norteamericana, formando y apoyando abiertamente fuerzas irregulares como la «Contra». Agregándole otro ingrediente: el mercado de asesores y mercenarios en nuevas tecnologías de guerra del más variado origen y apelando a fuentes financieras *non sanctas*.

La pregunta es ¿qué factores hicieron sostenible este sistema de guerra y cómo se articuló con el circuito de guerras suramericano, especialmente en Perú y Colombia? No cabe duda



de que hay tres telones de fondo comunes: la fase "Reagan" de la guerra fría, la guerra contra el narcotráfico y las conexiones con los mercados ilegales que estas guerras han tenido hasta articularlos en grandes circuitos o "macro-mercados" de violencia, mercados reales que dotaron a las guerras de importantes recursos.

Los vasos comunicantes entre una zona y otra son muy importantes para explicar las dinámicas militares.

"CONTRA" Y NARCOTRÁFICO

La décima tesis está sin construir: la clave del asunto está en la forma de intervención norteamericana para la formación de la "Contra" nicaragüense. Habría los siguientes antecedentes: el triunfo sandinista replantea la política continental de los Estados Unidos. El gobierno que comenzaba llega a la presidencia con un discurso que se apoya en tradiciones antidemocráticas. Lo primero que hizo fue lanzar una cruzada contra la URSS, sede mundial del "imperio del mal" y "foco de todo mal"³¹.

En 1981 Ronald Reagan le declara la guerra al gobierno sandinista, de manera frontal, reformulando toda la estrategia de seguridad para la región. Como se ha dicho, Estados Unidos no iba a tolerar una segunda Cuba. En 1982 la Cia ordenó minar los puertos nicaragüenses, pero la opinión estadounidense, más que ahora, no estaba dispuesta a afrontar otra guerra como la de Vietnam. El 10 de octubre de 1984 el Senado, de mayoría demócrata, mediante la "Enmienda Boland" le prohibió a Reagan cualquier intervención directa o "indirecta" en Nicaragua, desautorizando a la "Contra", la Fuerza Democrática Nicaragüense, Fdn. Sin embargo, los hombres

del presidente siguieron con el plan militar y financiero que los obligó a buscar recursos extraordinarios. Para ellos se elaboró un complejo plan que solucionaba dos frentes estratégicos: derrocar al gobierno sandinista y solucionar algunos problemas en Irán y el Líbano con las guerrillas islámicas. Inicialmente, se hace tráfico de armas hacia las milicias islámicas moderadas a cambio de la libertad de los rehenes estadounidenses en ese momento en el Líbano. Así, en 1984 se inició una de las operaciones que dan origen a la "Dark Alliance"³² denunciada ampliamente en el informe de la "Comisión Kerry" que integró el Senado de los Estados Unidos, conocida como la "Comisión del Crimen"³³. Allí se demostró que la operación encubierta involucró a numerosos traficantes israelíes, oficiales del ejército hondureño, agentes de la Cia, así como a colaboradores directos del vicepresidente George Bush en la Casa Blanca, quien tenía a su cargo la Secretaria de Estado para asuntos de Seguridad, así como al asistente del vicepresidente y del secretario de Estado, Oliver North, de quien dice el periódico *Washington Post*, en un documentado informe sobre sus nexos con el narcotráfico, que una aeronave fue detenida en el aeropuerto de San Andrés, luego de haber participado en el transporte de cocaína; lo anormal era que se trataba de una aeronave tipo DC-4 perteneciente al National Security Council de la Casa Blanca que estaba a cargo de North³⁴.

Tal vez el informe del senador Kerry tenga las claves para articular la hipótesis que ayude a explicar el auge de la guerra de los años 90 y cómo se cerraron los circuitos mercantiles entre los dos macro-mercados de violencia de América Latina: las guerras civiles centroamericanas y las guerras de los Andes y las selvas peruanas y colombianas.

³¹ Nótese la semejanza de la política de EE.UU. después del 11 de septiembre de 2001. En su momento Ronald Reagan manifestó: "La Unión Soviética tiene los impulsos de un imperio del mal... [y es] el foco de todo mal". Discurso de 8 de marzo de 1983. Compárese con el "eje del mal", papel atribuido por George W. Bush.

³² "Alianza Oscura". Gary Webb, desde el periódico *San José Mercury News*, de California, documentó ampliamente cómo en el área de la Bahía de San Francisco la Cia organizó un grupo de narcotraficantes para que vendiera cocaína a las pandillas del centro-sur de Los Angeles con el objetivo de financiar la compra de armas para la Fdn, la "Contra". Como si fuera poco, el jefe de las pandillas convirtió la cocaína pura en crack, mucho más adictivo y barato, y lo comercializó al por mayor a distribuidores de todo el país, con lo que contribuyó en forma muy eficiente a diseminar una forma mortal de drogadicción entre la población negra, chicana y latina. Gary Webb, *op. cit.*

³³ "Subcommittee on Terrorism, Narcotics and International Operations of the Committee on Foreign Relations", US Senate, *Drugs, Law Enforcement, and Foreign Policy*, ed. cit.

³⁴ La noticia fue reproducida por el diario *El Espectador*, Bogotá, martes 25 de octubre de 1994.